

2396 *ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso-administrativo promovido por don Venancio Herranz Torrubia.*

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promovido por don Venancio Herranz Torrubia, como demandante, y como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra los acuerdos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local y del Ministerio para las Administraciones Públicas de 12 de noviembre de 1986 y 27 de marzo de 1987 sobre retención efectuada por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, con fecha 13 de noviembre de 1987, ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos:

Primero.—Estimamos el presente recurso contencioso número 434 de 1987, deducido por don Venancio Herranz Torrubia.

Segundo.—Anulamos los acuerdos de la Dirección Técnica de la MUNICIPAL y del excelentísimo señor Ministro de Administración Territorial de 12 de noviembre de 1986 y 27 de marzo de 1987 objeto de impugnación.

Tercero.—Declaramos que no procede efectuar retención alguna de la pensión por invalidez al recurrente por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con subsiguiente devolución de todas las cantidades retenidas hasta la ejecución de esta sentencia, adicionadas con sus intereses legales correspondientes.

Cuarto.—No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.—P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

2397 *ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo promovido por doña Valentina Ana María Morales Reula.*

Ilmo. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promovido por doña Valentina Ana María Morales Reula, como demandante, y como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno de 20 de enero de 1984, desestimatoria de recurso de alzada contra Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de 18 de diciembre de 1981, que, a su vez, desestimó el recurso de reposición contra acuerdo de 9 de diciembre de 1980 sobre indemnización por fallecimiento por accidente del esposo de la recurrente, don Darío Freijanes Sampayo, la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 26 de noviembre de 1986, ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que con estimación del recurso interpuesto por doña Valentina Ana María Morales Reula contra recurso de alzada de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno de 20 de enero de 1984, desestimatorio del recurso de reposición resuelto en 18 de diciembre de 1981 contra el acuerdo de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado de 9 de diciembre de 1980, desestimatorio de indemnización por fallecimiento en accidente del esposo de la recurrente, don Darío Freijones Sampayo, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho dichas resoluciones, que, por tanto, anulamos, declarando corresponde a la recurrente la indemnización de defunción por fallecimiento en accidente de su referido esposo según el Real Decreto 1636/1980, de 24 de julio; todo ello sin imposición de costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida

sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.—P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

2398 *ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo promovido por don Francisco Muniesa Tomás.*

Ilmo. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promovido por don Francisco Muniesa Tomás, como demandante, y como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la Resolución de la Presidencia del Gobierno de 3 de enero de 1984, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de 21 de mayo de 1981, sobre pensión complementaria de jubilación, la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 11 de septiembre de 1987, ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Muniesa Tomás, representado por el Procurador señor García Yuste, contra las resoluciones de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de 21 de mayo de 1981 y contra la de 3 de enero de 1984 de la Presidencia del Gobierno, debemos declarar y declaramos dichos acuerdos conformes con el ordenamiento jurídico, y sin hacer declaración sobre las costas procesales causadas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 20 de enero de 1988.—P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

2399 *ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo promovido por don José Luis León Morrondo.*

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promovido por don José Luis León Morrondo, como demandante, y como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de julio de 1984, que resolvió la oferta pública de empleo para cubrir vacantes de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla-León, convocada por Orden de 27 de diciembre de 1983, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 7 de diciembre de 1987, ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos:

Primero.—Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso número 313.469, interpuesto por don José Luis León Morrondo, contra la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de julio de 1984, descrita en el primer fundamento de derecho, que se confirma en el aspecto aquí impugnado por ser ajustado a derecho.

Segundo.—No hacemos una expresa condena en costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el